

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Comunicado de prensa

Índice AI: PRE 01/068/2009
12 de febrero de 2009

Pakistán: El gobierno debe proteger a la población del valle de Swat

El gobierno paquistaní debe tomar de inmediato medidas para proteger de los insurgentes a centenares de miles de personas que habitan en el valle de Swat y en otras partes del país, ha manifestado hoy, 12 de febrero de 2009, Amnistía Internacional. Según cálculos oficiales, el año pasado más de 1.200 personas murieron en el valle de Swat a causa de los combates entre grupos talibanes paquistaníes y el ejército, y de 200.000 a 500.000 se vieron desplazadas.

“Los talibanes paquistaníes han demostrado su desprecio por la vida y los derechos de los habitantes del valle de Swat, mientras que el ejército paquistaní ha violado los derechos humanos y desatendido la seguridad de la población que aparentemente intenta proteger” ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

Desde 2007, un grupo armado local afiliado ideológicamente al movimiento talibán de Afganistán se ha hecho con el control efectivo de casi el 80 por ciento del territorio del valle de Swat, otrora destino turístico situado a sólo 160 kilómetros de Islamabad.

En Swat, los talibanes paquistaníes han cometido graves abusos contra los derechos humanos, entre ellos el homicidio ilegítimo de decenas de trabajadores del gobierno, así como de personas acusadas de incumplir sus edictos. Han azotado públicamente a hombres por afeitarse la barba, destruido tiendas por vender música y prohibido a las mujeres salir de sus casas sin ir acompañadas de un familiar varón.

A la plaza mayor de Mingora, la mayor ciudad de la zona, se la conoce localmente como “Khooni Chowk” (“plaza sangrienta”), por los más de 20 cadáveres que los talibanes paquistaníes han exhibido públicamente en ella.

Se calcula que hay unos 3.000 insurgentes talibanes en el valle de Swat. Estos grupos suelen poner en peligro a la población civil buscando refugio en los pueblos a sabiendas de que al hacerlo pueden provocar una reacción del ejército.

“En los últimos cinco años, la respuesta del gobierno al auge de la insurgencia en Swat y en las zonas tribales ha oscilado entre lanzar operaciones militares a menudo indiscriminadas y desproporcionadas, que han afectado principalmente a la población civil, y dejar a ésta abandonada a su suerte ante los abusos de los grupos insurgentes.

Hasta 15.000 soldados ha desplegado el gobierno en Swat para buscar a los insurgentes. Estas tropas utilizan helicópteros de reconocimiento armado y artillería pesada en sus operaciones, a menudo de manera indiscriminada, con los consiguientes perjuicios para la población civil. Decenas de miles de personas que han huido de la zona hablan de temor a las operaciones militares del gobierno, más que a los talibanes.

“El gobierno paquistaní debe aplicar una estrategia centrada en el respeto de los derechos y el bienestar de sus ciudadanos y abstenerse de llevar a cabo torpes operaciones militares que pongan en peligro a la población civil –ha manifestado Sam Zarifi--. Tiene asimismo que garantizar que no deja a sus ciudadanos a merced de los talibanes.”

Amnistía Internacional ha condenado la campaña de los talibanes paquistaníes contra la educación, especialmente contra la de las niñas. En los últimos 18 meses, los talibanes han destruido más de 170 escuelas en Swat, más de 100 de ellas de niñas. Estos ataques han interrumpido la formación de más de 50.000 alumnos de todos los niveles educativos, según cálculos oficiales.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que tome medidas de protección para garantizar que todos los alumnos de ambos sexos, incluidos los de familias que han huido de sus hogares, tienen acceso a la educación cuando se vuelvan a abrir las escuelas el 1 de marzo. Si el gobierno no puede proteger las escuelas de la zona, debe garantizar que los niños y niñas desplazados tienen acceso a otros medios de educación, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

“Al impedir la educación, los talibanes están amenazando los derechos de otra generación de paquistaníes –ha afirmado Sam Zarifi–. El gobierno de Pakistán debe garantizar que las personas que huyen del conflicto tienen debidamente cubiertas sus necesidades básicas, como los alimentos, la atención de la salud y la educación, y que las agencias humanitarias locales e internacionales pueden brindarles asistencia en condiciones de seguridad.”

Información complementaria

Swat es una “zona colonizada”, claramente diferenciada de las vecinas zonas tribales de la frontera afgana.

El valle de Swat tiene normalmente una población de alrededor de 1,5 millones de personas. En los dos últimos años, el clérigo radical Maulana Fazlullah y sus seguidores se han ido haciendo con el control de la región, donde han impuesto una administración *de facto*. El grupo ha consolidado su dominio estableciendo un sistema paralelo de justicia, con más de 70 “tribunales” para administrar “justicia rápida y fácilmente”, que en la práctica imponen penas que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Los talibanes paquistaníes tienen todas las noches emisiones de radio por FM en las que anuncian listas de políticos y trabajadores del gobierno locales “buscados”, a los que piden que comparezcan ante sus tribunales o pagarán las consecuencias, y recientemente han amenazado con matar a todos los abogados y jueces que no dejen de trabajar para el sistema judicial del Estado. La mitad o más de los 800 agentes de policía de Swat, demasiado asustados para seguir desempeñando sus funciones, han pedido un permiso o han desertado.

En mayo de 2007 fracasó un plan de paz entre el gobierno y los insurgentes de Swat, que supuestamente permitía a los extremistas reagruparse. Desde entonces, el gobierno no ha formulado ninguna política clara sobre cómo pretende proteger los derechos de la población del valle de Swat.

FIN/

Documento público

Si desean más información, pónganse en contacto con Carina Trimingham, de la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, llamando al número + 44 20 7413 5871, o dirigiéndose por correo electrónico a carina.trimingham@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten <http://www.amnesty.org/es/for-media>. Para documentación general traducida al español consulten <http://www.amnesty.org/es/library>.